

garantías que otorgan los artículos 28 y 49 de la Constitución federal, puesto que el remate expresado viene á constituir un monopolio prohibido por el primero de los artículos citados, y ese monopolio, autorizando á una sola persona á expender carnes, impide á los demas comerciantes del ramo practicar el libre expendio, contra lo prevenido en el 29 de los artículos referidos. Vistas las constancias de autos y atenta la sentencia del Juez de Distrito en que concede el amparo pedido, por cuanto á que segun aquellas constancias, es cierto el hecho en que se funda la queja que han deducido los promoventes, y supuesta la verdad de ese hecho, resulta la violacion de garantías que reclaman y procede en justicia el derecho de amparo que solicitan; segun los artículos constitucionales expresados, por los fundamentos anteriores y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Se confirma la sentencia que pronunció el Juez de Distrito del Estado de Tabasco en San Juan Bautista, capital del mismo Estado, á 25 de Julio proximo anterior, en cuyo fallo declara, que la Justicia de la Union ampara y protege á los predichos CC. Santiago Perez, Miguel Calderon y Francisco Jesus, contra la providencia del Ayuntamiento de la propia ciudad, en cuya virtud fue rematado el abasto de carnes en el C. Jose María Sanchez, el dia 30 de Julio último.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arteaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—José María del Castillo Velasco.—M. Auza.*

—*Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José Garcia Ramirrs.—Luis Maria Aguilar*, secretario.—Certifico que en la anterior sentencia no aparece la firma del Sr. Ministro Castañeda y Nájera, por estar impedido de la mano derecha.—*Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico: México, Setiembre 18 de 1873.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas por el C. Lic. Clemente F. Robles, contra una providencia del Juez de 1ª instancia de lo criminal del departamento del centro, quién lo mandó aprehender por considerarlo responsable de las innovaciones que dolosamente se hicieron al autógrafo del Instituto Literario del Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En este juicio de amparo promovido por el C. Lic. Clemente F. Robles, por haber el C. Juez de primera instancia del ramo criminal de esta Ciudad mandádolo aprehender con escoltas, el dia 8 del corriente, por creerlo innodado en el delito de falsedad de que este hace mérito en su informe del 10 del mismo, como Promotor fiscal y en virtud del artículo 13 de la Suprema ley de 20 de Enero de 1869, se me indica en el auto último de ese Juzgado, forme mi alegato por escrito, á pesar de no haberse recibido el negocio á prueba como lo pedí y la parte interesada lo repitió.

Para cumplir pues con esta prevencion, y prescindiendo de lo mucho que pudiera decirse respecto del modo de proceder del Juez ejecutor, porque al Juzgado de su digno cargo no le es dado remediar ó suspender

sus procedimientos, sino solo en la parte que ataquen ó vulnere alguna de las garantías que la Constitución federal otorga á los ciudadanos, versará mi alegato acerca de lo muy poco que aparece de autos.

El C. Juez de primera instancia en el informe que rindió, dice: que procedió contra el peticionario, en virtud de ser la autoridad competente y haber mérito para ello; esto es, para decretar la detención que insinúa en su mismo informe, fundándose en las declaraciones de los ciudadanos Timoteo Flores, Francisco Lopez, José María Espinosa y Octaviano Robles, que producen los indicios necesarios para decretarla; sin atender que la de los dos primeros, fué dada por medio de una certificación, que á mas de no estar estendida en el papel sellado correspondiente, pues de ello no se hace mérito en la que se lee á fojas 9, solo aseguran, que el C. Lic. Robles dió en presencia de ellos, al de igual clase Diego Lara, un royo de papel que á no dudar contenía el estatuto, como así lo dijo, para que lo pusiera en el folletín del periódico que redactaba; pero de ninguna manera afirman, dándose esto por cierto, que el tal cuaderno estuviera ya suplantado ó adulterado, que es lo que se averigua; de suerte, que siendo el primero, Regente del Instituto L., nada extraño es que hubiese pedido á la secretaría de Gobierno como lo asegura, el único ejemplar que habia del estatuto, para servirse de él en sus sesiones; y de consiguiente, esto no forma el mas leve indicio en su contra, y sí una nulidad y una falta punible, por haberse dado ese certificado en la forma dicha.

El segundo, es decir Espinosa, á mas de padecer su certificación del mismo vicio del papel no correspondiente, nada afirma contra el Lic. Robles, pues no ha dicho que cuando esté le devolvió el estatuto, la primera vez que se lo dió prestado, estuviere ya reformado ó hubiese sufrido algunas enmendaturas, ni su dicho tiene alguna relacion con el de los dos primeros, mas

que en la hipótesis de que el estatuto que prestó, pudo haber sido el que dió á Lara para ponerlo en el folletín de su periódico; pero sin enmendatura, porque de ella no se hace mérito ni suena una sola palabra que se le parezca; fuera de que este testigo, como Administrador de la imprenta y segun el artículo 34 de la ley general de 4 de Febrero de 1868, es el inmediato responsable del autógrafo que se le dió para imprimirlo en la Tipografía que se hallaba á su cargo, no precisamente para responder del impreso en los términos que previene el art. primero de la citada ley, con el que no se halla en contraposición, sino para dar cuenta y responder en el orden comun de los autógrafos que se innoven, ó pierdan, ó sufran otra avería durante su responsabilidad, y que siendo él el responsable de dicho estatuto, es el presunto reo del delito de falsedad que trata de averiguarse, en cuyo concepto y para este caso, su dicho es de ningun momento y no merece fé segun la ley 2, tit. 1º Part. 7ª.

El tercero que es el C. Octaviano Robles, dice en su certificado igualmente ilegal: "que segun recuerda, el Lic. Robles en los primeros dias del mes de Febrero, le contó se hallaba reformando los estatutos sobre grados de derecho y profesorados". Esta declaración que á primera vista parece decir alguna cosa, es igualmente ineficaz, pues no concuerda con la ratificación que de ella hizo en el Juzgado, segun se asegura por personas de providad, y quizá porque él mismo lo ha referido en términos que en la última no conviene acerca del tiempo que el simple certificado expresa, y que era lo único que hacía vislumbrar lo que ha querido aparentarse; fuera de que como antes se ha dicho, es ineficaz aun sin estas nulidades, 1º: porque no se encuentra estendido en papel sellado correspondiente, toda vez que de ello no hace mérito el Juez informante, habiendo por otra parte la costumbre ó corruptela de presentar esta clase de documentos, cuando mas en papel del sello

5º: 2º: porque el testigo ha declarado incierto y vacilante, sin dar razon de su dicho, como era preciso para que hiciera fé en juicio; 3º: porque faltando la apreciacion debida acerca del tiempo que tuvo lugar la conversacion referida, el Lic. Robles como uno de los encargados por el Gobierno del Estado para formar dichos estatutos, muy bien pudo enmendar, adicionar y hacer lo que le pareciera en ellos, antes de entregarlos al Gobierno y esto de darlos á la prensa; circunstancia que no está aclarada sino solo en la ratificacion que se ha omitido dar en la forma que debiera; 4º: porque las ratificaciones dichas de los testigos, solo se han hecho constar por una simple razon, debiéndose haber estendido al pie de la letra, como se hizo con el testo de las certificaciones, y por cuya falta se tienen como no ratificados, pues se ignora el contenido de ellas, y 5º: porque teniendo tales atestados todos estos defectos, é ignorarse si dichas ratificaciones se han hecho con citacion de la parte contraria, ó del reo, como lo previene la ley para su validez, son en rigor de derecho supérfluas, nulas y de ningun valor.

El último fundamento del ciudadano Juez de primera instancia, es el escrito que el Lic. Lara le presentó, segun, dice porque no aparece, en el que se asegura que el Lic. Robles era el que habia innovado los estatutos, presentando por comprobantes las certificaciones que ya se han examinado, y por cuya causa procedió á la captura dicha, sin tomar en cuenta ni considerar como debió, que el expresado Lic. Lara es, como no lo ignora, y lo sabe todo el Estado, el editor del periódico en que salió el referido estatuto reformado; que siendo editor, es conforme al artículo 35 de la ley general ya citada, el inmediato responsable; que siendo el inmediato responsable, es el presunto reo del delito, ó por lo menos el inmediato cómplice; y que siendo el presunto reo como debe ser, de conformidad con la ley 2 título 1º P. 7ª citada, su dicho no merece

fé en ningun concepto. Por manera, que, á obrar con justificacion, el juicio debió comenzar contra el editor y administrador de la imprenta, como responsables de las trasgresiones ó abusos que pasan en su tipografía, ó por mejor decir, entre ellos.

No queda, pues, para haber procedido contra el Lic. Clemente J. Robles, *el fundamento legal* que el artículo 16 de la Constitucion general exige para operar en su contra, por mas que se han querido aquilatar indicios que no brotan; y estando violado en su persona el artículo referido por habérsele perseguido con escándalo, destacando varias patrullas á un mismo tiempo en su casa y otras muchas de esta ciudad; el que suscribe como promotor fiscal, pide: 1º que ese juzgado en nombre de la justicia federal, ampare y proteja al expresado Lic. Clemente J. Robles. 2º: que averigüada que sea la infraccion del papel sellado de dichas certificaciones, se aplique la respectiva pena á quien corresponda; y 3º que se repongan estos sellos y los que dejó de usar el ciudadano juez de primera instancia, pues todo lo cree de rigurosa justicia.

San Cristobal Las Casas, Julio 28 de 1873.—(Firmado.)—*Carlos Ballinas.*

Sentencia del C Juez de Distrito.

San Cristobal Las Casas, 28 de Julio de 1873.—Visto el presente juicio de amparo interpuesto en 8 del corriente por el C Licenciado Clemente Francisco Robles, expresando estar violadas en su persona las garantías que otorga el artículo 16 de la Constitucion política de la República, con los procedimientos del Juzgado de primera instancia del ramo del Criminal de este Departamento, quien mandó aprehenderlo por considerarlo autor de las innovaciones que dolosamente se hicieron al autógrafo de los Estatutos del Instituto Literario del Estado, librado por el Congreso del mismo. Visto lo expuesto por la autoridad informante, con

los documentos que acompaña; la suspensión de dichos procedimientos, en virtud de lo dispuesto en la segunda parte del artículo quinto de la ley de 20 de Enero de 1869; el auto en que se denegó la recepción á prueba del juicio, pedida por las partes; lo alegado por las mismas; la citación para sentencia y cuanto mas verse debía.

Considerando: que para que pueda decirse que los actos reclamados violan el artículo 16 de la Constitución, se necesita que falte en ellos la observancia de alguna de las tres circunstancias que el mismo requiere, á saber: que el procedimiento nasca de autoridad competente; que sea consignado en mandamiento escrito, y que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Considerando: que en el caso, la autoridad informante confiesa haber ordenado la prisión del quejoso; pero no justifica de manera alguna, que su mandamiento de prisión hubiera estado de acuerdo con la segunda de las referidas circunstancias; en cuyo concepto, es indudable que está vulnerado el artículo constitucional, que sirve de fundamento á la demanda del promovente.

Considerando: que esto se corrobora aun mas, con la boleta que el interesado ha exhibido, en la cual se le prevenía se presentase al Juzgado, simplemente para la práctica de una diligencia judicial en la misma fecha, es decir, cuando se destacaban patrullas y se cateaban casas para aprehenderlo, como es público y de pública notoriedad, y sobre cuyo particular la autoridad informante nada ha dicho en contrario.

Considerando: que aunque la parte interesada ha presentado diversos documentos auténticos, para probar que otro es y no él el autor de los hechos por que se lo persigue, expresando ademas, que solo el espíritu de odiosidad y de venganza predomina en su contra; por mucho que así sea, la resolución de las cuestiones de tal modo propuestas, corresponden á una jurisdicción estraña, á la que conforme á derecho está encomendada á la autoridad federal.

Considerando finalmente: que aunque las partes en el juicio pidieron que este se abriera á prueba, el Juzgado no lo creyó necesario, primero: porque para comprenderse como se comprende, que el artículo citado ha sido infringido en una de sus partes mas esenciales, no era menester prueba alguna; segundo: porque no es un derecho de las partes pedirla, sino una facultad del Juzgado concederla, cuando lo crea conveniente; tercero: porque si el juicio de amparo es un remedio subsidiario contra los abusos de cualquiera autoridad que vulnere las garantías constitucionales, no es como se ha dicho un recurso para obtener lo que solamente debe alcanzarse por los medios comunes y ordinarios, que establece el derecho.

Con presencia de lo expuesto, y con fundamento de los artículos 16, 101 y 102 de la Constitución y 13, 23 y 27 de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia Federal ampara y protege al Ciudadano Licenciado Clemente Francisco Robles, contra los procedimientos de los cuales se ha derivado el presente juicio de amparo.

Hágase saber; líbrense las copias respectivas para su publicación; repóngase el papel sellado correspondiente que ha dejado de usarse, y elévense en revision estos autos á la Suprema Corte de Justicia.

Así lo previó y firmó el C. Juez por ante mí el Escribano que certifica.— Firmados.
—Juan J. Ramirez.—J. Crisóstomo Lara.

Es copia. San Cristobal Las Casas, Julio 31 de 1873.—J. Crisóstomo Lara.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 4 de 1873. Visto el recurso de amparo que en 8 de Julio último promovió en la ciudad de San Cristobal las Casas, ante el Juez de Distrito de Chiapas, el C. Lic. Clemente Francisco Robles, contra una providencia del Juez de 1ª ins-

tancia del ramo criminal, del Departamento del Centro, por cuya providencia se lo ha mandado aprehender, considerándole responsable de las inovaciones que dolosamente se hicieron al autógrafo de los Estatutos del Instituto Literario del Estado, expedidos por el Congreso del mismo, violándose, en sentir del promovente, la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución de la República Mexicana.

Vistas las constancias de autos y considerando: que la providencia reclamada se ha tomado, practicándose las diligencias legales de una averiguacion criminal del resorte del Juez que la tomó, citándose por escrito al quejoso, y fundándose en las constancias de esa averiguacion: que en este concepto, esa providencia ha sido con los requisitos que prescribe el artículo 16 de la Constitución federal, y por lo mismo no existe la violacion de garantías reclamada.

En mérito de lo expuesto, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve; 1º: es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito que ampara y protege al C. Lic. Clemente F. Robles, contra los procedimientos de los cuales se ha derivado el presente juicio de amparo. 2º: la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Lic. Clemente F. Robles, contra la providencia del Juez de 1ª instancia del ramo criminal del Departamento del centro del Estado de Chiapas.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan José de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Petro Ortaiz.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zaca-*
TOMO IV.—PARTE II.

vala.—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.—Certifico que en la anterior sentencia no aparece la firma del Señor Ministro Castañeda y Nájera, por estar impedido de la mano derecha.—*Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 22 de 1873. *Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Puebla contra D. Miguel Paz y Puente y D. Miguel Rojas, por falsificacion de papel sellado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Denunciada la falsificacion de papel sellado en 14 de Abril de 1869 por el C. Administrador del ramo en el Estado, se ha procedido á la averiguacion correspondiente con la prolijidad que requiere la naturaleza del negocio; y de ella han resultado tres clases de responsables.

Lo son de la primera y mas criminales, aquellos que prepararon y vendieron el papel sellado, notoriamente falsificado, sin dar razon legal y justificada de su adquisicion; lo son de la segunda, los que asociados con aquellos, por su encargo enagénaron el papel; y pertenecen á la tercera, los que han reducido su intervencion á recibir y aplicar á usos particulares el papel adquirido, sin antecedentes de que pudiera deducirse su complicidad en la falsificacion ó en la enagenacion de él. D. Miguel Rojas y D. Miguel Paz y Puente son en concepto del promotor fiscal, los principales responsables en esta causa, por ser el principio de donde salió el papel falsificado, segun las mas notables constancias del proceso; de manera, que no solo es de imputárseles la venta clandestina del efecto vedado en la 2ª parte del